

# Colombia, el Plan Colombia y la región andina

¿Implosión o concertación?

JUAN GABRIEL TOKATLIAN

**El artículo describe la actual crisis colombiana y los componentes del Plan Colombia, deteniéndose en los desafíos inmediatos e implícitos para la región andina y América Latina en su conjunto. El contexto político internacional indica una expansión concreta de la influencia territorial de Estados Unidos, ampliándose hacia los Andes. Es necesario que América Latina –o Sudamérica– reviva un organismo similar al de Contadora en los años 80, de manera de garantizar a través de la concertación una salida democrática para la crisis colombiana, cada vez más grave y compleja.**

**S**i los años 70 representaron para América Latina la década perdida en términos de desarrollo democrático, y los 80 lo fueron en cuanto al crecimiento económico, los 90 significaron la década perdida respecto a la concertación diplomática. En efecto, un repaso del despliegue, comportamiento y alcance del denominado Grupo de Río<sup>1</sup> (GR) en la última década del siglo xx, corrobora los límites y las deficiencias de la convergencia política elemental entre los países latinoamericanos.

Desde 1989, cuando se produjo la intervención armada de Estados Unidos en Panamá, el GR ha ido evidenciando elocuentes signos de estancamiento. En los últimos años, por ejemplo, no ha jugado ningún papel relevante en el proceso de pacificación en Guatemala, en la solución efectiva de la crisis ins-

---

JUAN GABRIEL TOKATLIAN: profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires.

1. El Grupo de Río se creó en 1986 en Brasil y resultó de la fusión del Grupo de Contadora (Colombia, Venezuela, México y Panamá) para la paz en Centroamérica, y de su Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay).

**Palabras clave:** guerra interna, seguridad regional, Grupo de Río, Grupo de Contadora, Plan Colombia.

titucional en Haití, en la defensa firme de la democracia en Perú quebrantada desde el autogolpe de Alberto Fujimori, en la resolución concreta de las intenciones golpistas en Paraguay, en el rechazo categórico de los recientes (Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad) golpes de nuevo tipo en Ecuador, entre muchos otros acontecimientos. En breve, ni en situaciones críticas vividas en el Caribe, en Centroamérica, en los Andes o en el Cono Sur, el GR mostró que América Latina haya sido capaz de desarrollar una dinámica endógena y propositiva para resolver seriamente los casos difíciles. Así, en 2001, al presentarse el delicado tema de Colombia, el Grupo de Río parece un espectador impávido de esa guerra interna más que un actor influyente para su potencial superación.

Mientras languidece políticamente el GR, Brasil organizó para finales de agosto de 2000 una cumbre sudamericana, no latinoamericana. La lógica que pareció sustentar esta convocatoria es la gradual consolidación de la noción de las dos Américas. América, desde hace al menos tres décadas, ha estado dividida en dos. Por una parte, era evidente la existencia de una América del Norte desde Alaska hasta Panamá, compuesta por Centroamérica, el Caribe insular, México, Canadá y EEUU, e integrada y asimilada *de facto* a éste, tanto en lo económico y político, como en lo militar y cultural. Por otra parte, era notoria la ambigua supervivencia de una América del Sur desde Colombia hasta Argentina, con una relativa mayor autonomía comercial, financiera y diplomática respecto a Washington. Norteamérica y Sudamérica eran dos entidades geopolíticas claramente diferenciadas a pesar de los puntos de contacto. Al parecer, para la diplomacia brasileña esta división es hoy difícil de revertir.

Sin embargo, al entrar en un nuevo siglo, la tesis de las dos Américas no ha tomado en consideración que cada día es más manifiesto que América del Sur misma parece partida en dos: los Andes por un lado y el Cono Sur por el otro. La región andina atraviesa una honda crisis de impredecibles consecuencias: Colombia es solo la punta del iceberg de un enorme témpano de problemas acumulados en su manifestación y postergados en su solución. En efecto, los Andes se han convertido, desde los 90, en el mayor foco de inestabilidad e inquietud continental. En materia política, se destacan el autogolpe de Fujimori en Perú, la caída constitucional de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, la salida política de Bucaram en Ecuador, el cuasi-desplome de Ernesto Samper en Colombia y la llegada al poder del ex-golpista Hugo Banzer Suárez en Bolivia. El descalabro social que llevó al grotesco derrocamiento de Mahuad en Ecuador, la ambición antidemocrática de Fujimori en Perú, la delicada incertidumbre institucional generada por Hugo Chávez en Venezuela, los crecientes inconvenientes de todo orden que vive Bolivia, la explosiva situación que confronta Andrés Pastrana en Colombia, son indicadores elocuentes de que los Andes están viviendo un torbellino.

En materia militar, el mayor enfrentamiento limítrofe del hemisferio se dio entre Ecuador y Perú, y la frontera más tensa del continente es, en la actua-

lidad, la de Colombia y Venezuela. En el tema de los derechos humanos, y en comparación con cualquier otra región de las Américas, la zona andina es aquella en la que más sistemáticamente se violan, siendo Colombia y Perú los casos más dramáticos. En la cuestión de las drogas, los Andes concentran el cultivo, procesamiento y tráfico de coca del continente y las cinco naciones (junto con México) son los actores claves en el negocio ilícito de los narcóticos. En materia de corrupción, en el área se encuentran algunos de los países con los mayores niveles en el mundo, destacándose los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el tema ambiental, los países andinos muestran altos y preocupantes grados de degradación, en especial del espacio amazónico que comparten con Brasil. En términos socioeconómicos, todas las naciones andinas exhiben alarmantes índices de desempleo, marginalidad, pobreza e inseguridad con bajos indicadores de calidad de vida, escaso y volátil crecimiento, fuerte concentración del ingreso y exigua inversión. En los cinco países por igual, aunque con variaciones, se exacerbó en la última década el desmoronamiento parcial del Estado.

Adicionalmente, y posterior a la Guerra Fría, es en la región andina (particularmente en Ecuador, Perú y Venezuela) en donde los militares han guardado más incidencia política y gravitación corporativa. Además, en esta zona, si se compara con otras regiones del hemisferio, varias naciones han efectuado tardíos y débiles ajustes económicos y reformas estructurales (en especial Ecuador y Venezuela). Asimismo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) está cada día más relegada ante los avances de otros acuerdos como el Tlcán y el Mercosur. Por último, el mundo andino es cada vez más dependiente de Washington en lo material y político y cada vez más distante del Cono Sur en lo cultural y diplomático. La esfera de influencia<sup>2</sup> de EEUU se desplaza de su tradicional *mare nostrum* –la amplia Cuenca del Caribe– proyectándose con más fuerza en el vértice andino del continente sudamericano.

Resumiendo, toda la región andina sufre simultáneamente agudos problemas de diversa naturaleza. Las muestras de conflictividad social en el área tienden a acrecentarse y es patente la incapacidad de los regímenes democráticos de procesar seculares demandas ciudadanas insatisfechas. En ese contexto, el caso de Colombia es indudablemente el más catastrófico. Este país sobresale en la dimensión de su crisis, aunque no es un ejemplo aislado y solitario: los Andes viven en condiciones de ingobernabilidad, lo cual presagia peligrosos cataclismos institucionales. Así entonces, la forma, el contenido y el alcance que se le otorgue a la salida a la crisis de Colombia servirá eventualmente de modelo de cómo y cuánto aporta la propia área (América Latina), región (Sudamérica) o zona (Cono Sur) a la resolución franca e innovadora de sus graves dificultades. El caso más difícil –en este sentido, Colombia– debe ser abordado y no evitado: solo así se podrá observar si la diploma-

2. Sobre la importante noción de esfera de influencia en la política internacional v. Paul E. Keal: «Contemporary Understanding about Spheres of Influence» en *Review of International Studies* vol. 9 N° 3, 1983.

cia de nuestros países ha madurado suficientemente para enfrentar con mayor autonomía relativa los desafíos del siglo XXI.

### Una precisión conceptual necesaria

Es importante evitar la tradicional confusión de términos –con efectos en la *praxis* concreta– que empaña la comprensión de la convergencia y la acción conjunta en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. En breve, existen cuatro nociones que se emplean de forma intercambiable, sin ninguna distinción ni mucho esclarecimiento: *concertación*, *cooperación*, *integración* y *unión*. La dificultad no es semántica ni menor, por el contrario, la ausencia de precisión para definir estos conceptos puede tener consecuencias prácticas altamente negativas en el campo de la práctica de la política exterior. De allí que parece prudente poseer una mayor y mejor claridad terminológica que, a manera de «modelo ideal», nos permita aproximarnos de un modo más nítido al tema. Así entonces, podríamos decir lo siguiente:

– **Concertación:** mecanismo mediante el cual dos o más gobiernos actúan conjuntamente en el terreno estatal, por lo general en el ámbito diplomático y con fines de preferencia políticos, frente a otros actores individuales o colectivos.

– **Cooperación:** esquema que implica que desde el Estado y con el concurso activo de algunos segmentos de la sociedad civil (en especial, el sector empresarial) se produzcan proyectos y acuerdos selectivos, puntuales y realizables de tipo económico y comercial particularmente y con un trasfondo político, entre dos o más partes entre sí y eventualmente entre aquellos países y otras contrapartes.

– **Integración:** proceso más amplio, intenso, complejo y profundo entre dos o más naciones que implica una vinculación e interpretación social, política, económica, cultural, científica, diplomática e incluso militar de enormes proporciones y con un papel dinámico y protagónico de diversos agentes de las sociedades involucradas.

– **Unión:** una estructura institucional y territorial que, a modo de confederación o federación, constituye una entidad política organizada (*polity*) y reconocida internacionalmente.

En América Latina, la concertación en los últimos años la ha expresado el GR. En el área existe cooperación, pero aún no florece la integración y la unión está muy distante. Ahora bien, esta clarificación no responde a un prurito académico. El rigor conceptual tiene implicaciones políticas e institucionales. Esta cuádruple dilucidación ayuda principalmente al diseño de un planteo estratégico en política exterior. También contribuye a determinar los alcances y requerimientos de una coordinación burocrática eficiente para manejar diferentes frentes, con distintos objetivos, diversos tiempos de ma-

duración y concreción, y múltiples actores comprometidos interna y externamente. Asimismo, coadyuva a la adquisición de una mayor exactitud en cuanto a la dirección y la orientación necesarias para movilizar recursos humanos, físicos y técnicos, estatales y no gubernamentales, en pos de cada uno de esos procesos y mecanismos. Además, influye en el campo de las percepciones: ni todos los esquemas de agrupación son semejantes, ni es imperioso estar en todos *per se*, ni cada uno de ellos es idéntico en términos de su utilidad, valor y significación o es parte inevitable de un rompecabezas amorfo que algún día ligará, mágicamente, el conjunto de piezas.

### Un balance crítico

El Grupo de Río ha evidenciado en la década de los 90 un creciente debilitamiento interno y una notoria vulnerabilidad externa. La mayoría de los escasos análisis<sup>3</sup> que explican este hecho se apoya en una argumentación de sesgo externo: la unilateralidad de Washington en el concierto mundial, la robusta rehegemonización continental de EEUU luego del final de la Guerra Fría, las nuevas realidades derivadas de la globalización, entre otras, determinan los altos niveles de debilidad y vulnerabilidad del GR. A su vez, las evaluaciones que destacan el valor del Grupo a pesar de su languidez y fragilidad, colocan el énfasis en la necesidad de preservarlo debido a sus presuntas bondades diplomáticas: mecanismo de diálogo periódico, bajo costo de mantenimiento, poca formalidad, continuidad, interlocutor con otras regiones, etc.

Ambas inferencias son válidas, aunque no explican en toda su dimensión el estancamiento y deterioro del GR. El origen de las restricciones del Grupo está en el sistema internacional, pero la fuente de sus mayores dificultades actuales está en Latinoamérica y el Caribe, es decir, en los países miembros. De manera sintética, dichas dificultades son de tres tipos:

– Agenda. En este caso los problemas han sido y son múltiples. Primero, la ampliación numérica de los países participantes sumada a una expansión de los temas que presuntamente cubren los intereses de los gobiernos del Grupo, ha llevado a carecer de un mínimo de ordenamiento de prioridades. Segundo, una vaguedad en el tratamiento de esos mismos tópicos, lo cual le ha ido restando credibilidad. Tercero, un tono cada vez más reactivo y menos afirmativo en el planteamiento de aquellos asuntos, lo que le ha quitado protagonismo al Grupo como interlocutor cohesivo y audaz en sus propuestas. Cuarto, una presentación ambigua y cauta de dichas cuestiones ante distintas contrapartes, afectando el vigor de las posiciones del GR. Quinto, una falta de referente nítido hacia el que se le proyectan los planteamientos (¿EEUU? ¿Unión Europea? ¿un Norte unificado? ¿algunos agentes/actores internos en los países del Centro?), lo cual torna sencillo seguir acumulando aseveraciones por doquier y recibir un caluroso apoyo internacional, al tiempo que se

3. Un buen texto que hace un balance de la primera década del GR es el de Raúl Barrios (ed.): *El Grupo de Río: Un diálogo vigente*, Plural Editores, La Paz, 1996.

dificulta una estrategia de negociación consistente *vis-à-vis* distintas contrapartes. Y sexto, una esterilidad en la traducción operativa (en el ámbito de la acción) de esos planteos, con lo cual decrece el perfil del GR.

– Consenso. La dificultad de arribar a consensos fuertes por parte del Grupo se ha tornado cada vez más preocupante. Existen múltiples factores exógenos que hacen muy problemático y laborioso el logro de acuerdos básicos y sustantivos. Independiente del reconocimiento del peso de las variables de índole externa, es pertinente insistir en la necesidad de un análisis nacional más sincero para entender los mayores impedimentos que existen para concitar consensos fundamentales y operativos. El ejemplo de la hoy poco recordada deuda externa fue el más elocuente y el que tiende a repetirse al momento de abordar cuestiones fundamentales de la agenda externa de la región. Respecto a aquel tema, todos los gobiernos del área jugaron a moderar a los otros a tal punto que la moderación trajo consigo el inmovilismo y la ausencia de originalidad. Todas las tesis de los miembros del Grupo triunfaron (de cara a sus respectivas sociedades) con el resultado global de la pasividad y la fragmentación. Entendiendo las obvias diferencias entre situaciones por país, pareció diluirse un mínimo común denominador grupal negociable frente a otros actores estatales y no gubernamentales. En la actualidad, a los fines prácticos, el tema se esfumó del temario del GR. Ese solo hecho –la desaparición hasta discursiva del tópico– coloca al Grupo en una posición frágil y errática ante otras contrapartes más poderosas para las cuales la cuestión de la deuda ya no constituye un problema (todo lo cual les refuerza a estos últimos su estrategia de no buscar soluciones estructurales al asunto). Es muy fácil al interior del GR obtener consensos débiles (todos contra el fenómeno de los narcóticos, todos a favor de mayores inversiones en educación, todos de acuerdo para robustecer los mecanismos multilaterales de diálogo, etc.). Sin embargo, hallar una mayoría sólida y solidaria que pueda convertir retórica en práctica, problemática en solución, iniciativa en acción, teoría en *praxis*, postura defensiva en posición ofensiva, ha sido lisa y llanamente imposible en el último lustro. El caso del GR pareciera demostrar que la conjunción creativa de intereses nacionales individuales es incompatible con un interés colectivo fortalecido. En un escenario mundial posterior a la Guerra Fría en el que la noción de soberanía limitada, parcial o difusa, ha ido ganando espacio por sobre el criterio clásico de soberanía absoluta e ilimitada, el Grupo, en vez de compatibilizar soberanías endebles para confrontar contrapartes más dotadas de atributos de poder, parece haber alimentado una legitimación de múltiples alternativas unilaterales que van en desmedro de una concertación efectiva.

– Política exterior. En la actualidad prácticamente no existe política exterior latinoamericana (desde la mexicana hasta la jamaicana o la argentina) que no se autodefinan como pragmática. Bien o mal utilizada esta calificación, lo que de hecho encierra son tres notas claves: cada país del área ha construido, en su propio imaginario, su visión y versión de una suerte de «relación especial» hacia EEUU, más por utilitarismo que por principio, y a pesar de que

dicha relación no sea vista recíprocamente de la misma forma, las limitaciones externas parecen imponer solo lógicas transaccionales individuales, en especial frente a Washington; parece predominar una racionalidad por la cual se piensa que la unidad excesiva con la mayoría de los pares del área disminuye la posibilidad de obtener beneficios de las contrapartes con mayor poder del sistema internacional. En cuanto a la retórica, Latinoamérica y el Caribe son el epicentro de las referencias de las respectivas políticas exteriores de los países, sin embargo la práctica no parece coincidir suficientemente con los discursos. Es cierto que han proliferado ventajosos acercamientos y convergencias binacionales o entre algunos pocos países, pero el compromiso político colectivo está muy lejos de materializarse. El manejo del problema de la pobreza, la resolución del asunto de las drogas, la mejor protección ambiental, entre muchos otros temas, se han ido definiendo —en los hechos y no en la letra— como cuestiones nacionales de tratamiento preferentemente bilateral (en especial, en relación con EEUU) y episódicamente multilateral. Un sencillo análisis de teoría de juegos indica que las opciones conservadoras (en el sentido de asegurar lo individual, el no riesgo, y el *statu quo*) culminan desastrosamente para cada miembro particular en el mediano y largo plazos. Los presuntos beneficiados a corto plazo no pueden sostener su ventaja por mucho tiempo y sin costos elevados para el resto. Conviene, asimismo, recordar que hasta los propios interdependentistas, tan citados explícita o implícitamente por los mandatarios del área en sus discursos en torno de la ascendente interdependencia mundial, reconocen que la armonía en sí misma no conduce a la negociación; es la existencia de la discordia —natural en las relaciones internacionales— la que abre espacios para el debate y la transacción<sup>4</sup>. No obstante, resulta difícil modificar percepciones sobre ganancias unilaterales posibles en escenarios inestables e inciertos. No hay nada más tentador y sencillo que autojustificar las salidas propias y no conjuntas.

Si esta aproximación es medianamente verosímil, entonces resulta pertinente no generar en cuanto al GR falsas expectativas de aporte en relación con el ejemplo de Colombia. Lo más prudente es olvidarse del Grupo en este caso.

### ¿Qué hacer con Colombia?

Las conversaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han oscilado entre el estancamiento virulento, el despegue ambivalente y los avances sorprendidos, mientras el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se ha concretado todavía. Es probable que los contactos formales y las conversaciones nominales se produzcan, con logros parciales, pero no es claro cómo evolucionarán las negociaciones concretas en el mediano plazo. Para entender las posibilidades de éxito de una paz elusiva, resulta insoslayable preguntarse por la naturaleza cambiante de la guerra en Co-

4. V., en particular, Robert O. Keohane: *Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica mundial*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988.

lombia<sup>5</sup>. En ese sentido, corresponde efectuar una precisión inicial en términos históricos y comparativos. El caso colombiano se destaca debido al notable cambio que ha habido entre las disputas violentas durante la Guerra Fría y en la actualidad. De acuerdo con un reciente estudio de Wallensteen y Sollenberg<sup>6</sup>, en el periodo 1989-1998 hubo 108 conflictos desarrollados en 73 sitios; en 1989, 47; en 1992, 55; en 1997, 34; y en 1998 persistían 36 conflictos. Hay que destacar la importante caída de los conflictos armados en Asia (de 19 en 1989 a 15 en 1998) y Latinoamérica (de 8 a 2 en ese periodo); el leve descenso en Medio Oriente (de 4 a 3 en ese lapso); y el mantenimiento de los mismos en Europa (2) y África (14) entre 1989-1998. Asimismo, mientras hubo 3 conflictos internacionales en 1989 y 2 en 1998, los conflictos internos fueron 44 en 1989, llegaron a 54 en 1992 y descendieron a 34 en 1998.

Además, de los 108 conflictos mencionados, 75 se terminaron a finales de 1998: 21 concluyeron con acuerdos de paz, 24 con la victoria de una de las partes y 30 terminaron con compromisos de cese al fuego o por el significativo descenso de los niveles de violencia. De los 26 conflictos más agudos en 1998, 16 habían comenzado antes de 1989, lo cual implica que los conflictos más recientes fueron, en general, más contenidos o resueltos que los antiguos. Para 1998, los conflictos más intensos, por el número de víctimas fueron Yugoslavia en Europa; Afganistán y Sri Lanka en Asia; Argelia, Angola, Burundi, Congo, Eritrea/Etiopía, Guinea Bissau, Ruanda, Sierra Leona y Sudán en África; y Colombia en las Américas. De los conflictos más virulentos, el caso colombiano es el más longevo, uno de los más trágicos, el de mayor complejidad en el continente y de los más sobresalientes en el plano mundial. ¿Hacia dónde transita entonces el enfrentamiento militar en Colombia?

Una hipótesis para contemplar es el deslizamiento de la guerra irregular colombiana hacia una guerra civil o hacia una guerra separatista<sup>7</sup>. En uno u otro escenario, el componente internacional es fundamental. Respecto a la guerra civil, y con base en un detallado estudio empírico que analiza el desarrollo y la conclusión de 41 guerras internas entre 1940 y 1990, Walter plantea que la gran mayoría de las guerras civiles durante ese periodo no culminaron en una mesa de negociación, sino en el exterminio o la capitulación de una de las partes<sup>8</sup>. Refutando tanto la perspectiva racionalista que postula que los cálculos costo beneficio de los actores armados son los que dificultan

5. Sobre Colombia, v. Juan G. Tokatlian: *Globalización, narcotráfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia*, Norma, Buenos Aires, 2000.

6. V. Peter Wallensteen y Margareta Sollenberg: «Armed Conflicts, 1989-1998» en *Journal of Peace Research* vol. 36 N° 5, 9/1999.

7. Para algunos analistas y observadores colombianos y estadounidenses, la concesión del gobierno del presidente Pastrana a la guerrilla de las FARC de un área de despeje de 42.000 Km<sup>2</sup> en el sur del país se ha constituido en un peligroso precedente para una potencial desmembración de Colombia.

8. V. Barbara F. Walter: «The Critical Barrier to Civil War Settlement» en *International Organization* vol. 51 N° 3, 1997; y B.F. Walter: «Designing Transitions from Civil War: Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace» en *International Security* vol. 24 N° 1, verano de 1999.

un acuerdo pacífico a un conflicto, como la perspectiva idealista que señala que las emociones y los valores envueltos en una guerra civil son los que impiden alcanzar una salida no bélica, afirma que la alternativa negociada exitosa se logró solo cuando una tercera parte, distinta al conflicto, respaldó de modo decisivo un compromiso entre las partes.

La sensación de enorme vulnerabilidad militar de los participantes de un enfrentamiento armado y la desconfianza frente al otro, dificultan los compromisos serios. El miedo y la inseguridad de los adversarios obstaculizan la salida negociada. Sin embargo, si las partes están en un contexto de simetría y acuerdan un proceso de transición donde el cumplimiento de lo convenido sea garantizado por un tercer actor, entonces es bien probable alcanzar la resolución pacífica de cualquier conflicto. Es preferible, de acuerdo con Walter, que el garante sea un Estado determinado. Para que la participación del tercero resulte creíble es necesario que se reúnan tres condiciones: 1) que el Estado interviniente tenga intereses tangibles en el país en guerra; 2) que esté dispuesto a usar la fuerza, incluso militar, para garantizar el cumplimiento de las promesas firmadas; y 3) que demuestre constante firmeza.

En ese sentido, y si el caso de Colombia sirve de ejemplo para lo aquí expresado, es probable que una tercera parte con poder incuestionable e intereses específicos, como EEUU, juegue un rol decisivo en ese país. Por eso es evidente el incremento de la intervención indirecta de Washington en los asuntos colombianos en la actualidad, mientras no es descartable la amenaza palpable y hasta el uso explícito de la fuerza de su parte en el largo plazo para forzar una eventual solución a una prolongada y envilecida guerra. Esto no quiere decir, por lo tanto, que se esté *ad portas* de un intervencionismo unilateral de EEUU en Colombia. La participación directa de Washington es más ominosa que inminente, y continuará intensificando su intervención indirecta, por medio de una mayor asistencia militar, en Colombia. De llegar a una acción concreta, Washington optará, quizás, por un mecanismo multinacional o multilateral. No debería desecharse una modalidad de injerencia hemisférica, por vía de una coalición *ad hoc* de naciones, para definir la guerra o para afirmar la paz, dos opciones distintas que responderán a condiciones nacionales y continentales diferentes en favor de una salida negativa o positiva al complejo enfrentamiento armado. ¿Se hará esta política cada vez más dinámica? Casi con seguridad. En la medida en que Colombia no resuelva la enorme crisis de ingobernabilidad que vive, EEUU liderará, expresa o tácitamente, la búsqueda de alternativas drásticas. Para lograrlo ya ha avanzado, con bastante éxito, en la identificación de Colombia como un caso que afecta la seguridad continental.

Paralelamente, Heraclides<sup>9</sup> sostiene que las guerras separatistas son «confrontaciones armadas entre un Estado soberano e independiente y un movi-

---

9. Alexis Heraclides: «The Ending of Unending Conflicts: Separatist Wars» en *Millenium Journal of International Studies* vol. 26 N° 3, 1997.



miento de base regional que intenta separarse de aquel o busca una forma amplia de gobierno propio en el nivel territorial». Para el autor, no deben confundirse con las guerras de carácter étnico o religioso. Solo se necesita un actor regionalmente poderoso con voluntad y capacidad de desafío combativo al Estado central para que se presente un conflicto armado con visos separatistas. Las modalidades de separatismo oscilan entre la desunión, que significa incorporarse a otro Estado existente, la secesión, que implica crear un nuevo Estado, o el autogobierno, que es la fórmula de mayor autonomía posible bajo un mismo Estado.

El caso de la desunión, aunque realmente improbable e inverosímil, podría producirse si el gobierno del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, además de declarar la neutralidad frente a la guerra interna y de otorgarle implícitamente estatus beligerante a la guerrilla en Colombia como lo ha hecho, pretendiera asimilar territorios contiguos a la frontera que hoy cuentan con alta influencia y control de la insurgencia colombiana<sup>10</sup>.

Los escenarios de la secesión o del autogobierno en Colombia son menos extravagantes y deberían ser hipótesis a ponderar. El peor escenario de la secesión transformaría al país en una suerte de Yugoslavia latinoamericana; el mejor escenario del autogobierno la convertiría en una especie de Suiza confederada. Entre uno y otro escenario hay un abismo y sobresalen situaciones intermedias intrincadas y ambiguas con implicaciones distintas. Cualquiera sea el escenario resultante, es imperioso asumir que, para bien o para mal, el futuro de Colombia afectará la geopolítica hemisférica y regional, estará muy ligado a las nuevas formas de intervención, amenaza coercitiva y uso de la fuerza, e incidirá sobre la evolución política y militar del continente.

Cabe destacar que, según Heraclides, al contrario de las guerras revolucionarias que, en su mayoría, culminan con la derrota militar de una de las partes, las guerras separatistas parecen más aptas para el compromiso. Luego de estudiar 70 conflictos de este tipo entre 1945 y 1996, el autor señala que 21% de ellos terminó en un triunfo militar del Estado, y 10% en una victoria del contrincante; 31% culminó de manera negociada mediante formas diferentes de gobierno independiente o gobernación autónoma. El resto se caracteriza por casos superficialmente congelados pero con violencia intermitente o por la prolongación de combates sin salida de ningún orden. Paradójicamente, si el caso del conflicto armado en Colombia tuviese connotaciones separatistas, éste –siguiendo el argumento de Heraclides– podría tener más probabilidad de resolverse por la vía de la negociación.

Sin embargo, más allá de estas hipótesis, en el caso colombiano una verdadera catástrofe humanitaria se esconde tras un conflicto que nos parece coti-

---

10. Cabe destacar, asimismo, que en 1999 el alcalde de Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander, limitrofe con Venezuela), José Gélvez Albarracín, se mostró partidario

diano e incomprensible<sup>11</sup>. Los datos no pueden ser más elocuentes<sup>12</sup>. Durante la última década, la violencia política se expresa con casi 10 muertos por día. Aproximadamente 10% de los municipios del país está totalmente destruido por las guerrillas. El paramilitarismo, por otro lado, es el gran responsable de las mayores masacres cometidas contra la población civil desarmada. Desde los años 80, el número de desaparecidos por motivos políticos supera 4.000. Solo entre 1995 y 2000, se han llevado a cabo 12.000 secuestros a manos de los actores armados, de la criminalidad común y hasta de los cuerpos de seguridad del Estado. En toda la década del 90, la cifra de homicidios superó los 250.000. Desde 1996 se ha manifestado un éxodo al exterior de casi 300.000 colombianos. En los últimos tres lustros se ha producido el desplazamiento interno forzado de más de 1.500.000 personas. Entre asesinados, mutilados, secuestrados, desplazados y reclutados, más de 1.000.000 de niños son víctimas de la guerra. La gran mayoría de estos hechos queda impune.

Frente a estas cifras es obvio que ningún país quiera agregar sus muertos a la tragedia colombiana. Sin embargo, esto no exonera a los países del hemisferio de un compromiso ético para impedir el desangre de un vecino. Es de esperar que antes de precipitar una salida de fuerza para Colombia, América Latina o Sudamérica apunten hacia una solución política. Por ello, es deseable que antes que copiar una coalición militar al estilo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una u otra sean capaces de idear una novedosa propuesta diplomática para superar el drama humanitario y la crisis política en aquel importante país.

## El Plan Colombia de Estados Unidos

Ya se encuentra en ejecución la multimillonaria asistencia de seguridad de EEUU a Colombia: el Congreso en Washington autorizó 1.319,1 millones de dólares para responder militarmente a una guerra interna compleja y degradada. El componente B del denominado Plan Colombia –plan diseñado en 1999 en la Casa de Nariño por sugerencia de la Casa Blanca– se aplicará luego de un intenso debate en Washington, una tenue discusión en Bogotá y un preocupante mutismo en el hemisferio.

---

de separarse y formar la «República de El Zulia» entre el departamento colombiano de Norte de Santander y los estados venezolanos Zulia, Táchira y Mérida. El director de la policía, general Rosso José Serrano, calificó de «desvarío», «excentricidad» y «traición» este tipo de manifestaciones; v. *El Espectador*, 24/6/99. Más recientemente, los habitantes de Puerto Carreño, capital del Vichada, colindante con Venezuela, le enviaron una carta al presidente Chávez con una petición de anexión a su país. De acuerdo con un editorial de *El Tiempo*, esos actos simbólicos que «ahondan el malestar» de las regiones con el gobierno nacional «no deben ser subestimados»; v. «Donde termina Colombia» en *El Tiempo*, 12/2/00.

11. Ver J.G. Tokatlian: «Colombian Catastrophe» en *The World Today* vol. 56 N° 1, 1/2000.

12. Todos los datos acá referidos provienen de informes públicos colombianos e internacionales. Las cifras proceden de documentos oficiales de entidades como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería, así como de ONGs colombianas como Fundación País Libre y la Comisión Andina de Juristas, y de instituciones como Amnesty International, Human Rights Watch, entre varias otras.

El Plan del gobierno de Andrés Pastrana, de 7.500 millones de dólares, tiene hasta ahora tres piezas. El componente A es interno, es el más cuantioso y tiene por objeto reducir los efectos negativos de la crisis que vive el país mediante medidas de acercamiento material del Estado hacia las áreas más afectadas por la violencia. Esta suerte de plan A dentro del macro Plan Colombia apunta a fortalecer la presencia institucional del Estado. En su diseño está implícito el principio de la «mano tendida» que acuñó en su momento el presidente Virgilio Barco (1986-1990) y que apuntaba a la pacificación por vía del contacto estatal con la comunidad y por medio de una salida negociada.

El plan B es la ayuda de EEUU; Washington ofrece más de lo mismo, pero en más corto tiempo y para otro destinatario. En efecto, entre 1989 y 1999, Colombia recibió más de 1.100 millones de dólares en asistencia antidrogas. Ahora, el país recibirá un monto semejante, pero en dos años, y el receptor principal será el ejército y no la policía como lo fue en la década de los 90. Se trata del «pulso firme» –complemento de la «mano tendida» enunciada hace más de una década–, pero hoy más vehemente. La lógica subyacente es que solo más poder de fuego y más despliegue espacial de las Fuerzas Armadas pueden equilibrar el creciente poderío territorial de la guerrilla y la enorme influencia regional del narcotráfico. Si en los últimos 10 años, con todos los recursos de seguridad estadounidenses brindados a Colombia se elevó como nunca antes la violencia de todo tipo, la violación de los derechos humanos y el desquiciamiento de la guerra, nada augura que en el próximo bienio no se agudicen estos mismos problemas.

El Plan Colombia de EEUU tiene unos componentes precisos. El paquete específico para Colombia llega a 860,3 millones de dólares. De ese total, la asistencia militar asciende a 519,2 millones y la ayuda policial alcanza a 123,1 millones. En ese sentido, se trata de fortalecer a las Fuerzas Armadas (tres nuevos batallones para operar en el sur del país; 16 helicópteros Blackhawk y 30 helicópteros UH-1H Huey; y mejores instrumentos de combate y comunicación) para que efectivamente asuman una postura más ofensiva en la guerra y de mejorar la capacidad de la policía en el combate contra las drogas (2 helicópteros Blackhawk y 12 helicópteros UH-1H Huey; entrenamiento para labores de fumigación; etc.). Otras categorías contempladas son: desarrollo alternativo (68,5 millones de dólares); ayuda a los desplazados (37,5 millones); derechos humanos (51 millones); reforma judicial (13 millones); aplicación de la ley (45 millones); y paz (3 millones). El resto del paquete de 1.319,1 millones de dólares –es decir, 458,8 millones– se desagrega en dos grandes categorías: ayuda a otros países vecinos de Colombia (180 millones) y recursos a ser usados directamente por autoridades estadounidenses (278,8 millones). Respecto a esta última categoría, 276,8 millones de dólares son para el Departamento de Defensa (mejoramiento de las bases de Ecuador, Aruba y Curazao, programas de inteligencia rutinarios y clasificados, equipamiento de radares, entre otros). Si se descompone el total general del paquete en sus diversas piezas, destinatarios y propósitos, se tiene que aproximadamente 75% se orienta al fortalecimiento bélico en la ya longeva e inefi-

caz «guerra contra las drogas», guerra que cada vez más toma el carácter de «lucha antinarcoguerrillera» en la nomenclatura de Washington.

El plan C es el aporte europeo a la paz. Esta porción del Plan Colombia representa la contribución al mejoramiento de las condiciones sociales en las regiones donde el Estado ha estado menos presente. Europa no tiende a resolver nada, sino a compensar los costos de políticas erradas, particularmente las inducidas por Washington. Este componente no es nuevo: Europa siempre ha prometido «otro» aporte —lo hizo desde 1990 mediante un acotado Sistema de Preferencias Andino/Drogas—, «otra» mirada —la de la corresponsabilidad en materia de drogas— y «otro» espíritu —a favor de los derechos humanos y la paz dialogada. Y, como en otros momentos, no hay mucho que esperar de esas promesas: siempre son superadas por las acciones. La contribución estatal europea ha sido más simbólica que práctica. La Mesa de Donantes reunida en Madrid en julio de 2000 lo corroboró: solo España (100 millones de dólares) y Noruega (20 millones de dólares) comprometieron recursos para el Plan Colombia. Meses más tarde la Unión Europea decidió aportar 105 millones de euros para el periodo 2000-2006 como forma de apoyo institucional al proceso de paz y con el fin de alcanzar la defensa de los derechos humanos, la protección ambiental y la sustitución de cultivos ilícitos. La gravitación diplomática, material y estratégica europea ha sido, es y será mucho menor a la de Washington.

En ese contexto, Colombia parece necesitar con urgencia un plan D capaz de resolver seriamente, y no solo contener en el corto plazo, la guerra que padece. Ese plan debería ser convenido por los colombianos y contar con el apoyo de los latinoamericanos. Colombia necesita una Contadora perentoriamente, que revalorice la negociación y el compromiso por sobre las armas y las promesas; una Contadora que se impulse desde el Cono Sur y que revierta el silencio de Latinoamérica y la parálisis de Sudamérica. Un plan D político es imperioso porque ni la cercana asistencia militar estadounidense ni la distante participación europea prometen superar la situación existente. La Contadora para Colombia necesita, a su vez, trascender el plano estatal: es indispensable una alianza de la sociedad civil colombiana no armada, de actores políticos y sociales gravitantes latinoamericanos, de sectores democráticos en EEUU y de grupos progresistas europeos. Ello bien podría repolitizar la crisis en Colombia: volver a politizar el comportamiento del Estado y la conducta de la guerrilla. Esta opción, aún no genuinamente ensayada, puede facilitar una potencial salida a una desoladora guerra.

### **Una Contadora para Colombia**

Es incuestionable que el conflicto armado en Colombia tiene una relevante dimensión internacional. Las posibilidades de paz y guerra se ven condicionadas por aspectos externos (consumo creciente de drogas en las naciones más industrializadas; provisión masiva y clandestina de armas; la política exterior de EEUU; el auge del crimen organizado transnacional; la incerti-

dumbre institucional en toda el área andina; los roces recurrentes con los países vecinos), mientras el drama humanitario interno tiene cada vez mayor impacto regional y resonancia mundial. Sin embargo, subrayar la magnitud de la tragedia colombiana no puede conducir a justificar algún tipo de intervención militar, pero sí debe motivar una mesurada intervención política. Colombia necesita una nueva Contadora, es decir, un amplio apoyo diplomático con liderazgo de Sudamérica y a favor de una solución política negociada.

La urgencia de una Contadora para Colombia se debe evaluar en el marco de una situación estratégica novedosa en la zona. En ese sentido, la presencia del presidente Clinton en Cartagena a finales de agosto de 2000 en el contexto de una visita de 10 horas a Colombia, simbolizó el cruce de una delgada línea: EEUU pretende asegurar su esfera de influencia más allá de la Cuenca del Caribe<sup>13</sup>. Washington ya domina su *mare nostrum* caribeño y busca ahora un control efectivo en los Andes, en esa «tierra nuestra» de Sudamérica. Así, la definición de alianzas y equilibrios zonales es clave. Estados Unidos fuerza un cordón sanitario alrededor de Colombia con el concurso resignado de Panamá y Ecuador y el respaldo ambivalente de Perú. Panamá, estrecho aliado de EEUU, ha armado sus límites. Cabe recordar que de acuerdo con la enmienda De Concini, incorporada al Tratado Bilateral de Neutralidad (adjunto al Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal), Washington se reserva la posibilidad de «actuar contra cualquier amenaza dirigida contra el Canal o contra el tránsito pacífico de naves». Esto implica que si guerrilleros, paramilitares o narcos colombianos afectan con sus actos el Canal, EEUU puede invocar la enmienda para legitimar un despliegue militar en Colombia. Ecuador, que vive una delicada situación interna y ha escogido la dolarización de su economía, acepta *de facto* el Plan Colombia de Washington porque obtiene 81,3 millones de dólares: 20 millones para labores antidrogas y 61,3 millones para el mejoramiento del sistema de radares del aeropuerto Eloy Alfaro.

---

13. La breve visita de Clinton fue inmensamente significativa. El encuentro entre él y Pastrana selló una situación, más que una relación individual, estratégica que inaugura un momento novedoso en las relaciones interamericanas. En efecto, esta corta cumbre encerró múltiples mensajes para distintas audiencias bajo un telón de fondo común: el caso Colombia está definitivamente politizado y allí se dirime una compleja lucha por el poder que trasciende los bordes de esa nación. En términos de su política interna, Clinton ubicó el conflicto colombiano y su efecto para la seguridad de EEUU en un lugar de alta visibilidad pública, mostró que es capaz de aplicar la mano dura en la «guerra contra las drogas», intentó fijar una política de Estado (bipartidista, integral y de largo alcance) frente al caso colombiano y buscó aplacar a los que ven en el trato a Colombia el inicio de un nuevo Vietnam. En términos de las relaciones entre Washington y Bogotá, la visita fortaleció a Pastrana en la coyuntura interna pero le restringió su margen de maniobra externo en el mediano plazo, implicó un fuerte golpe político contra la guerrilla y legitimó una creciente injerencia de EEUU en los asuntos colombianos. En términos regionales, el viaje reafirmó la preferencia por el unilateralismo de EEUU en materia hemisférica, entorpeció la cumbre de presidentes sudamericanos organizada por Brasil, contribuyó a la identificación de Colombia como el mayor problema de seguridad en el área y reforzó la creciente militarización andina y amazónica para contener las consecuencias de la crisis colombiana.

Entre los países pequeños más cercanos a Colombia, EEUU cuenta con respaldo implícito o explícito. Por ejemplo, Nicaragua, vecino marítimo de Colombia, aprovecha el contexto para avanzar sus reclamos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, de soberanía colombiana, pero donde se producen marginales brotes secesionistas. Jamaica, Honduras, Haití, Costa Rica y República Dominicana —cada vez más afectados por el narcotráfico—, también vecinos marítimos de aquél, no cuestionan ni el Plan Colombia ni la militarización del Gran Caribe impulsada por Washington con el argumento de la lucha contra las drogas. Hacia el norte de Colombia, en las áreas menos inmediatas, la perspectiva no parece tampoco consoladora. Algunas islas del Caribe se han alineado con EEUU: Washington brindará, dentro del Plan Colombia, 10,3 y 43,9 millones de dólares para el mejoramiento de los sistemas de radar de los aeropuertos Reina Beatrix (Aruba) y Hato International (Curazao), respectivamente. Cuba, por su lado, viene jugando un papel discreto y constructivo: Castro ha propiciado una actitud de diálogo dentro del ELN y trata de usar su menguado ascendiente sobre las FARC para que eviten llevar a Colombia al desastre. México, por su lado, oscila entre el respaldo y el distanciamiento: en los años recientes la diplomacia mexicana ha buscado deslindarse de Colombia y así mostrar, con la mirada puesta en Washington, la diferencia entre ambos en materia de drogas y de insurgencias.

Hacia el sur de Colombia, Bolivia (que recibirá 110 millones de dólares del Plan Colombia y para quien Clinton solicitó la condonación total de su deuda externa de 4.500 millones de dólares), en silencio, acompaña a EEUU. Chile permanece expectante, sin condenar categóricamente a Washington. La diplomacia de Argentina fluctúa entre la asepsia y el escepticismo; formalmente respalda la paz, pero no hace mucho por Colombia ni censura a EEUU. El sur del Cono Sur está geográficamente distante de la situación colombiana y políticamente menos inclinado a criticar con vehemencia a Washington. Sus inmediatos intereses tradicionales no parecen estar en juego, pero eso es un error estratégico mayúsculo. Se viene precipitando una gran inestabilidad en el mundo andino en general que más temprano que tarde afectará a la región en su conjunto. Narcotráfico sin control, insurgencias poderosas, crimen organizado creciente, colapso parcial del Estado, mayor presencia militar de EEUU, rivalidades encendidas, violencia urbana en auge, pobreza extendida y desigualdad alarmante configuran un cuadro que producirá más inestabilidad, más violación de los derechos humanos, más desplazados, refugiados y migrantes, menos atractivos para la inversión externa, más autonomía militar sobre el poder civil, entre otros. Buenos Aires y Santiago parecen operar como si fuesen islas democráticas consolidadas.

En Sudamérica, asimismo, las posturas de Brasil y Venezuela, aunque por motivos no exactamente idénticos, convergen cada vez más. Venezuela ha fortificado sus límites con Colombia. Fricciones complejas e incidentes recurrentes alimentan una situación delicada en la que se conjugan un histórico litigio en el Golfo de Venezuela, recientes manifestaciones separatistas en departamentos colombianos como Norte de Santander y Vichada, y el «espí-

ritu bolivariano» que comparten el presidente Chávez y las FARC. En el caso de Caracas, pesan hoy tanto los múltiples problemas fronterizos como el peligro de un efecto dominó en medio de una situación venezolana convulsionada y un deseo de distanciarse de Washington en varios frentes. Brasil ha incrementado sus dispositivos militares fronterizos de manera notable. Una frontera porosa sirve a guerrilleros y narcotraficantes por igual, mientras una creciente presencia de asesores estadounidenses en Colombia pone a Brasil en verdadera alerta: si se quiere expresar metafóricamente, narcos y boinas verdes son percibidos como amenazas para un país que históricamente ha tenido sus fronteras delimitadas sin dificultades y sin peligros inminentes. No hay que olvidar, a su vez, la enorme expansión del narcotráfico en Brasil: allí hay claras manifestaciones de un mayor consumo de drogas, más rutas de transporte, más descubrimiento de cultivos ilícitos, más violencia urbana ligada al crimen organizado, etc.

Ahora bien, Colombia no es Vietnam. La intervención militar directa de EEUU es más ominosa que inminente. Sí crece y aumentará la intervención militar indirecta de EEUU. En ese sentido, Colombia se parece más a El Salvador, pero multiplicado y con mayor complejidad: más tamaño, más significación, más asistencia de seguridad, más confusión. En el caso colombiano hay mucho de la vieja modalidad de intervención típica de la Guerra Fría: apoyo militar de EEUU sin involucramiento individual masivo. Y también hay algo de una nueva modalidad de injerencia pos-Guerra Fría: creación de un cordón sanitario militar y diplomático para una eventual acción multilateral de diverso tipo en el caso de una implosión interna descontrolada. Colombia, los colombianos y colombianas no armados no necesitan ni del paradigma Vietnam ni del paradigma El Salvador; Colombia requiere una nueva Contadora que resuelva políticamente la guerra interna.

Al igual que en la experiencia en América Central, el respaldo a Colombia debería ser útil para ofrecer un diagnóstico realista de la situación; debe evitar premisas equivocadas y precisar la naturaleza real de las amenazas existentes. Se necesita un nuevo y honesto análisis sobre el país. Así como en su momento antes de crearse Contadora el gobierno de EEUU promovió la redacción del Informe Kissinger sobre Centroamérica, ahora los propios latinoamericanos deben establecer un Informe sobre Colombia para facilitar la labor de la nueva Contadora. Figuras de la talla de Raúl Alfonsín, por ejemplo, podrían encabezarlo.

De igual manera, así como en los años 80 la Contadora para Centroamérica pretendía abrir espacios políticos y diplomáticos para que Nicaragua y El Salvador no se perdieran para Occidente, este nuevo intento debería evitar que Colombia se pierda para el continente en términos democráticos. También, de la misma forma como Contadora para Centroamérica supo desagregar los componentes de la crisis en el istmo y definir procedimientos, procesos y políticas específicas y generales, la Contadora para el caso colombiano necesitaría desarrollar una capacidad semejante para entender la simultá-

nea y ambigua yuxtaposición y autonomía de distintos fenómenos violentos en el país.

No obstante, la nueva Contadora debería superar a la anterior en varios aspectos. Primero, en su percepción, por parte de la Casa Blanca y del legislativo en Washington como antiestadounidense. Sin duda, la Contadora para Colombia debería ser entendida como una alternativa válida y valiosa para que EEUU no «vietnamice» su relación con el país ni «otanice» o «tiarice» los escenarios hipotéticos para el uso de la fuerza. Segundo, si Contadora en América Central solo se ocupó del conflicto armado político, en Colombia debería aportar a una comprensión diferente de la guerra interna y de asuntos tales como el lucrativo negocio ilícito de las drogas –cuestión crucial en el caso colombiano y ausente en el caso centroamericano. Tercero, si Contadora en América Central aportó una voz diplomática a una crisis básicamente política, en Colombia la nueva Contadora debería ir más allá y presentarse como fuerza dispuesta a presionar con una vasta variedad de instrumentos legítimos una solución global y genuina al conflicto colombiano. Cuarto, Contadora en Centroamérica evitó la propagación de un conflicto de baja intensidad por toda el área, pero no contribuyó a forjar un nuevo pacto democrático en los Estados con altos niveles de violencia. En Colombia debería dejar en claro que en el largo plazo no es conveniente que solo se resuelvan temporalmente los enfrentamientos armados y se deje inalterada la estructura de poder vigente.

En breve, para que Colombia no se convierta en un laboratorio de ensayo de modalidades de intervención militar, nuestros países –en especial los del Cono Sur– deben asumir un papel protagónico en la resolución de la crisis colombiana por la vía diplomática. El país hoy merece y necesita el tipo de la solidaridad política hacia Centroamérica que prevaleció en Contadora y no de la soberbia militar que desplegó la OTAN en Kosovo ni de elucubraciones que lleven a invocar en Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.